

MONOPOLIO EDUCATIVO Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA ⁽¹⁾

Las primeras palabras de mi tema "monopolio educativo", se refieren al Estado y me exigen de inmediato el análisis somero de las funciones del mismo en el Derecho Natural y en el Derecho Político.

Las funciones primordiales y exclusivas del Estado, y en esto nadie discrepa, son: la defensa del territorio nacional, la paz interna, el mantenimiento del orden jurídico y el cuidado de la higiene y salud públicas.

El Estado, organismo ético, es institución de existencia real e independiente, no ficticia, de caracteres propios y diferenciados, con realidad concreta positiva y limitada, con existencia natural y permanente, con fines indispensables e irrenunciables.

Reconocemos y aceptamos su dominio sobre nosotros como guardián del bien común, como procurador del bienestar general, como defensor de la comunidad contra los ataques del exterior, como legislador para enunciar los derechos individuales y sociales, como juez para dirimir las diferencias particulares, como celoso defensor de la salud previniendo y atacando las plagas y enfermedades que amenazan nuestra vida.

Estas son las funciones primordiales del Estado, pero queda un espacio muy grande todavía para su actividad, como procurador del bien común temporal de sus súbditos y es el de "ayudar los intereses". Este espacio comprende el orden religioso y moral, el orden económico, y el orden científico y estético.

En estos sectores de la vida social la actividad tiene que ser libre y el hombre debe gozar de su iniciativa individual, pero el Estado debe intervenir para estimularla si le faltan acicates, para ayudarla si es débil o insuficiente, para suplirla cuando no existe. El Estado, como gerente de la felicidad común, debe estar pronto

(1) Trabajo leído por el autor como relator del tema IV, en el IIº Congreso Interamericano de Educación Católica, realizado en Buenos Aires, del 5 al 15 de octubre de 1946.

para llenar todos los claros que la impotencia particular no ha podido cubrir en el dominio de la actividad útil y en consecución del bienestar general.

En uno de estos órdenes, los límites se han violado, las vallas se han saltado. Así en el orden económico; en unos casos por doctrinas erróneas, socialistas o nazistas; en otros por efectos de las dos últimas terribles guerras que dejaron al Estado de pié en medio de una economía privada destrozada, el estatismo ha invadido en una forma pavorosa el campo de la economía. Así en el orden religioso, la legislación ha dado normas en materias de Patronato o matrimonio que corresponde a la Iglesia.

Y así también el orden cultural y científico ha invadido el campo de la enseñanza, en un sentido y extensión que no le corresponde. La misión del Estado de velar por el bien común, de promover la felicidad temporal, lo hacen apto y con derecho a promover la educación. Pero éste es un sector delicado de las funciones del Estado porque se encuentra aquí con otras instituciones, con deberes anteriores y superiores a los suyos.

Aquí se encuentra el Estado con la Iglesia y la Familia, instituciones con derechos preeminentes a la educación de los niños. No puedo entrar a fundamentar los derechos que corresponden a estas instituciones porque incumbe a otros temas de este mismo Congreso, pero abordo directamente el monopolio de la enseñanza por el Estado. No tengo tampoco tiempo para hacer la historia de este abuso desde Licurgo hasta nuestros días.

Pero me interesa arrancar desde Rousseau porque es el padre de los errores educativos de la época contemporánea. El sofista ginebrino es el inspirador del despotismo del Estado bajo el nombre encantador de voluntad general. El es el que ha animado al gobernante a sentirse con fuerzas para transformar hasta la misma naturaleza humana. Y él es el que ha sometido todo a la omnipotencia del Estado, aun la misma religión, aun la misma justicia y el derecho.

Es difícil encontrar en los doctrinarios del Derecho Político quien abogue directamente por el monopolio de la enseñanza de parte del Estado. Se dice, sí, que la educación y la instrucción constituyen un fin eminentemente social y, por lo tanto, debe realizarlo el órgano de la sociedad que es el Estado. Se atribuye, pues, principalmente al Estado la educación, dejando por consiguiente en segundo término a la Iglesia y a la familia, en lo que se incurre naturalmente en error porque se permite la educación a éstos

como un don gracioso del Estado y no como un derecho natural y primario.

Los monopolistas de la enseñanza arguyen que el Estado debe mantener la unidad moral del país, que a él le corresponde la formación de los individuos, que él mira siempre el interés general.

En realidad, el monopolio de la enseñanza aparece en la historia de los pueblos como un abuso de los gobernantes, como un hecho, como una prepotencia del poder público que quiere manejar, a su antojo, las ideas y los hombres. Esa es la biografía del monopolio desde Juliano el Apóstata hasta Napoleón I, desde Federico II hasta Hitler.

Es triste constatar que la bandera del monopolio la han agitado casi invariablemente los gobernantes y pedagogos naturalistas de Francia, desde la Revolución del 79 hasta nuestros días. Lo digo con sentimiento por lo que amo a la noble Francia; a pesar del grito de "Liberté" y de las notas de la Marsellesa, la libertad no se ha vivido realmente en Francia si no en las instituciones anglo-sajonas.

El monopolio educativo busca un fundamento doctrinario, asignando al Estado la enseñanza como una de sus funciones esenciales, arguyendo que él tiene que procurar la difusión de los conocimientos entre los habitantes del país, que posee autoridad científica, que es encargado del bien común y por lo tanto debe tratar de que todos reciban una óptima educación, que los padres no están en condiciones de proporcionar. Los más atrevidos llegan a fundamentarla en la necesidad de que el Gobierno establezca la unidad moral del país; Napoleón I^o lo decía francamente: "*En el establecimiento de un cuerpo enseñante, mi fin principal es tener un medio de dirigir las opiniones políticas y morales...*"

Por último hay quienes fundan el monopolio en la necesidad de que en las escuelas no se descuide la enseñanza de los ramos indispensables para la formación de los ciudadanos y magistrados, para que no se inculquen ideas contrarias a la moral universal, o que minen los cimientos de la organización social y política.

No hay, sin embargo, en los tratadistas del Derecho Natural ni en los maestros eminentes del Derecho Político quien atribuya al Estado una función esencial en la enseñanza; lo he demostrado acabadamente en un libro, escrito hace 23 años; la doctrina nace de pedagogos, políticos y gobernantes positivistas de la III^a República Francesa y de allí pasa a nuestra América Latina, en virtud de la admirable sugestión e influencia de la literatura gálica.

El monopolio estatal de la enseñanza se realiza de varias maneras: sea prohibiendo la existencia de escuelas particulares; sea permitiendo su funcionamiento pero imponiéndoles planes, programas, títulos y exámenes; sea obligando a recibir la enseñanza estatal por una presión económica indirecta al hacer obligatoria la institución sin una correspondiente subvención de las escuelas privadas.

Negamos que la enseñanza sea una función primordial del Estado. Ella corresponde, en primer término, a la Iglesia, a la familia y a la sociedad, como lo han demostrado otros relatores de este Congreso; por eso me eximo de extenderme en esto, y lo doy por probado. Creo que ningún católico ha negado al Estado el deber de interesarse en la educación, en cuanto debe velar por la felicidad de los súbditos, pero siempre en carácter supletorio y subsidiario, llenando los vacíos que deje la iniciativa particular.

El Estado no tiene autoridad científica. Su intervención en este sentido es inocua o fatal para la ciencia. Suprime el estímulo de la competencia; no puede cambiar sus prescripciones burocráticas al compás del progreso de la ciencia; fabrica cadenas y ligaduras de carácter político; esteriotipa e inmoviliza la enseñanza; genera la rutina, la indiferencia y el aplastamiento. No quiero cansaros mencionando lo que han dicho los filósofos políticos sobre la absorbente intervención del Estado. Me basta invitaros a que leáis en este asunto a un pensador muy lejano de nuestras ideas, como lo es Herbert Spencer cultor del naturalismo pedagógico contemporáneo.

La enseñanza es cuestión de la familia y de la sociedad. La ciencia es función de los cuerpos sabios, de los institutos libres, de las universidades autónomas. El Estado conservará siempre su misión de ayuda y estímulo y, como guardián del orden público, vigilará que no se impartan enseñanzas contrarias a la moral, a las instituciones, al orden público, ni que se lesione la salud y la higiene públicas.

La libertad de enseñanza es la libertad de los individuos, de las familias y las instituciones privadas para transmitir los conocimientos científicos que posean en todos los órdenes de la ciencia.

Es indispensable analizar el significado íntimo de las palabras para saber de qué libertad hablamos y cuál es la que defendemos.

La libertad, en cuanto se manifiesta como derecho del hombre en la vida social, se distingue en libertad *psicológica* y libertad *moral*.

La libertad psicológica (o física) es la facultad, posibilidad o aptitud física para obrar en un sentido o en otro. En este sentido se dice que el hombre, como ser libre, tiene el poder (no el derecho) de robar o no robar, de matar o no matar. Se prescinde, pues, aquí de la moralidad o inmoralidad de la acción realizada.

La libertad *moral* es la facultad que el hombre, como ser libre, tiene para obrar dentro de la moralidad y licitud de los actos que realice. Esta, que puede llamarse libertad, derecho o libertad jurídica es la que compete a los hombres que viven en sociedad. Es la que defendemos los católicos cuando hablamos de libertad de enseñanza.

Dos problemas se presentan también en la cuestión de la libertad de enseñanza. El problema de la *libertad de cátedra o doctrinal* y el problema de la *organización de la enseñanza*.

La libertad de cátedra o doctrinal se refiere a la facultad ilimitada o restringida que ha de tener el docente para impartir la enseñanza de las ideas que le plazcan con cualquier método pedagógico.

La organización de la enseñanza se refiere a las condiciones que se exigen en los docentes; planes, métodos y programas que se han de utilizar; exámenes oficiales o semi-oficiales; capacidad para expedir diplomas de suficiencia.

Sostenemos que la libertad de cátedra no es absoluta sino que está limitada por la verdad y el bien, por las leyes divinas y humanas y por el orden público.

La organización de la enseñanza es una atribución de los particulares e institutos privados como delegados que son de los padres de familias poseedores potenciales del derecho de educación al que están estrechamente ligada la organización de la misma.

Siendo el fin del Estado la felicidad temporal de sus súbditos debe respetar los derechos de la persona humana, entre los cuales está la transmisión de los conocimientos útiles por medio de una educación integral que oriente hacia la perfección. En este derecho está comprendido el individuo, la familia y las corporaciones con vocación para enseñar.

Este derecho supone naturalmente la aptitud científica y técnica para impartir los conocimientos pues no es racional que cualquiera enseñe lo que quiera.

Los congresistas que han relatado los temas II y III os habrán demostrado los derechos de la Iglesia y de la familia a la educación de los niños y adultos. Supongo ya bien asentados esos

derechos, y me ocupo de la libertad que hay que reconocerles así como el derecho natural de cualquier individuo aislado a enseñar a sus semejantes siempre que tenga capacidad y se mantenga en los límites de la verdad y el bien.

La libertad de enseñanza que la razón nos dicta y que los católicos defendemos es la que S. S. León XIII nos define en su Encíclica "Libertas" con estas palabras: *"No puede, en efecto, haber duda de que solo la verdad debe llenar el entendimiento, porque en ella está el bien de las naturalezas inteligentes y su fin y perfección; de modo que la enseñanza no puede ser sino de verdades, tanto para los que ignoran como para los que ya saben, para dirigir a unos al conocimiento de la verdad y conservando en los otros. Por esta causa, sin duda es deber propio de los que enseñan, librar de error a los entendimientos y cerrar con seguros obstáculos el camino que conduce a opiniones engañosas. Por donde se ve cuanto repugna a la razón esta libertad de que tratamos, y como ha nacido para pervertir radicalmente los entendimientos al pretender ser lícito enseñarlo todo según su capricho; licencia que nunca puede conceder al público la autoridad del Estado sin infracción de sus deberes"*. (Párrafo 32).

Esta condenación de la libertad absoluta de cátedra, que León XIII había pronunciado en 1888, tratando acerca de la libertad humana, nos la refirma en otros términos S. S. Pío XI en su Encíclica sobre la Educación Cristiana de la Juventud (*Divini Illius Magistri*) dada el 31 de diciembre de 1929, con estas palabras:

"Esta norma de la justa libertad científica es a la vez norma inviolable de la justa libertad didáctica o libertad de enseñanza rectamente entendida y debe ser observada en cualquiera manifestación doctrinal a los otros y con obligación mucho más graves de justicia en la enseñanza dada a la juventud, ya porque respecto a este ningún maestro público o privado tiene derecho educativo absoluto, sino participando ya porque todo niño o joven cristiano tiene estricto derecho a una enseñanza conforme con la doctrina de la Iglesia, columna y fundamento de la verdad, y le causaría grave injusticia quienquiera que turbase su fe, abusando de la confianza de los jóvenes para con los maestros y de su natural inexperiencia y desordenada inclinación a una libertad absoluta, ilusoria y falsa".

La libertad de enseñanza como un derecho ilimitado y absoluto concedido por la naturaleza no podemos admitirlo porque no está ella en esa extensión incluída entre los derechos naturales del hombre.

León XIII ha dicho con toda autoridad: "...No es lícito de ninguna manera pedir, defender, conceder la libertad de pensar, de escribir, de enseñar, ni tampoco la de cultos, como otros derechos dados por la naturaleza al hombre; pues si los hubiera dado en efecto, habría derecho para no reconocer el imperio de Dios y ninguna ley podría moderar la libertad del hombre". (Encíclica "*Libertas*").

Así es que la libertad que admitimos debe venar sobre lo verdadero y lo bueno y esto no puede cambiarse por el capricho del hombre sino que está determinado por la naturaleza de las cosas.

Si nosotros nos encontramos en las Constituciones modernas establecidas estas libertades con un sentido que no es el nuestro, debemos aceptarlas como una situación contingente que hay que tolerar y aunque prestemos una adhesión sincera a un régimen fundado en una diversidad irreductible de creencias debemos reservar los derechos imprescindibles de la verdad y no transformar una aceptación prudente y circunstancial en un ideal político permanente.

Por eso León XIII nos ha dicho: "...Si hay justas causas, podrán tolerarse estas libertades, pero con determinada moderación, para que no degeneren en liviandad e insolencia. Donde estas libertades estén vigentes usen de ellas para el bien los ciudadanos, pero sientan de ellas lo mismo que la Iglesia siente. Porque toda libertad puede reputarse legítima, con tal que auniente la facilidad de obrar el bien; fuera de esto, nunca". (Encíclica "*Libertas*").

Y salgamos del Derecho Natural para ingresar en el Derecho Político, y mas concretamente, en el Derecho Constitucional.

Las Constituciones Modernas establecen en su parte dogmática (que es la que está generalmente al comienzo de las mismas consignando los derechos fundamentales del hombre) el principio de la libertad de enseñanza.

Este principio que han copiado todas las Constituciones de la Norteamericana de 1789 lo deducen sus doctrinarios de la libertad de pensamiento es decir, de la facultad del hombre para expresar libremente sus ideas por la palabra y por escrito.

En teoría, estas Constituciones le asignan una extensión ilimitada y en el artículo en que se establece no se fijan fronteras a la expresión del pensamiento. Pero en la práctica surge la fuerza de la razón y del sentido común y aparecen las limitaciones en el Derecho Penal por calumnias e injurias, por desacato a los gobernantes, por reuniones ilícitas; y en el Derecho Municipal por violaciones a la moralidad y a las buenas costumbres.

En la Constitución de mi país, en el mismo artículo en que se establecen los derechos fundamentales del hombre (el 14) hay un párrafo que dice: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En estas humildes y escondidas palabras se han refugiado las prescripciones del Derecho Natural para defender los fueros de la razón y de la justicia.

En las Constituciones americanas se ha establecido la libertad de enseñar y aprender. Que se practique, que se viva realmente este principio es por lo que luchamos nosotros desde hace muchos lustros.

El principio de la libertad de enseñanza, ha sido ampliamente practicado en las instituciones anglo-sajonas. Y en este aspecto ocurre, por lo menos en mi país, una cosa muy curiosa, que os paso a relatar:

La Constitución de la República Argentina tiene como modelo a la Norteamericana; no es una copia servil, pero la sigue en sus grandes líneas, en sus declaraciones fundamentales, nuestros tratadistas de Derecho Constitucional comparten su doctrina con admiración y citan su jurisprudencia con respeto; Sarmiento, nuestro educador mas conocido, tenía veneración por las instituciones americanas y trajo de aquel país maestros para establecer la escuela en nuestra tierra.

Pues bien, señores, a pesar de todo esto, la libertad de enseñanza vivida y practicada ampliamente en los Estados Unidos es como si fuera una planta exótica en nuestra tierra. Y esto ¿por qué? Porque nuestra cultura es francesa, nuestro estilo para escribir y pensar es francés a pesar de las instituciones americanas. El positivismo francés, valido de ese idioma preciso e insinuante, ha hecho prevalecer la idea del monopolio. Jules Ferry y Ferdinand Buisson han sido entre nosotros más poderosos que Story y que "El Federalista".

Pero en honor a la verdad y en homenaje a la Francia eterna debo decir que las ideas sanas y ortodoxas sobre la libertad de enseñanza la hemos adquirido en esos libros admirables que se compran en la rue Saufflot y en el Boulevard de Saint Germain. Es indudable, señores, el bien y el mal fluyen con impulso universal de la Ciudad Latina. Voltaire y Bossuet son de la misma tierra.

Esta libertad de enseñanza que está escrita en nuestras Constituciones de los países americanos es la que venimos a reclamar.

Esta libertad quiere decir que todos los que están capacitados tienen derecho a impartir la enseñanza: la familia, los padres, los

maestros, las instituciones de educación. Si así no fuera, la palabra libertad no tendría ningún sentido porque si ella fuera para el Estado la declaración estaría demás porque él ya tiene el poder y la fuerza. Las declaraciones de derechos son para los débiles, son para que los individuos y las asociaciones puedan exigir su cumplimiento del Estado.

Hablando de este asunto observo otra anomalía en la vida práctica de las instituciones. Entre las libertades fundamentales que se inscriben al comienzo de todas las constituciones contemporáneas, al lado de la libertad de enseñanza, se encuentra la libertad de imprenta o de prensa; ambas tienen origen en la libertad de pensamiento, es decir, en la facultad de pensar y de opinar libremente y de transmitir las ideas a los demás por la palabra o por la pluma.

Siendo análogas estas libertades, la de imprenta y la de enseñanza ¿por qué será que se defiende a la una tan celosamente y se le trate a la otra como a Cenicienta? Si hay la más mínima violación de la libertad de imprenta en un rincón del país inmediatamente surge una protesta airada de la mayoría de los diarios, se reúne el Círculo de la Prensa, se envían telegramas de protesta al Ministro del Interior. Y si se viola la libertad de enseñanza, el sagrado derecho de los padres a transmitir a sus hijos sus conocimientos, si se impide la apertura de una escuela libre, nadie se irrita, nadie dice nada. ¿Por qué será esta diferencia? ¿No es más sagrado el derecho de los padres a educar a sus hijos que el derecho de los periodistas a informar al público?

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norte América al resolver un pleito declaró en 1925 *"que no competía al Estado ninguna potestad general de establecer un tipo uniforme de educación en la juventud, obligándola a recibir la instrucción de las escuelas públicas solamente"* y fundaba su fallo en la razón del derecho natural al decir: *"El niño no es una mera criatura del Estado; quienes lo alimentan y lo dirigen tienen el derecho, junto con el alto deber, de aducarlo y prepararlo para el cumplimiento de sus deberes"*. (Oregon School Cases. — Junio 1º de 1925).

En virtud del derecho natural y de las prescripciones constitucionales nosotros reclamamos el derecho de establecer institutos libres de enseñanza primaria, secundaria y superior sin otras condiciones que el control del Estado para exigir el respeto a la moral, a las instituciones vigentes y a la salud pública.

La imposición por el Estado de planes, métodos, horarios, exá-

menes y expedición de diplomas, implica ya la negación de la libertad de enseñanza porque en la organización particular de todas estas cosas está incluido el espíritu, el alma de la misma educación.

Insistimos en que nadie niega al Estado el derecho de enseñar. Así, por ejemplo, en nuestra Constitución Argentina se atribuye al Congreso Nacional la facultad de "dictar planes de instrucción general y universitaria". Estos planes son para las escuelas y universidades oficiales. Es legítimo que el Estado contribuya al bienestar general creando sus propios centros de enseñanza donde la iniciativa particular sea nula o insuficiente.

Nadie niega tampoco al Estado el derecho de exigir un mínimo de enseñanza en las escuelas primarias, una dotación esencial en las escuelas de medicina, y un control en defensa de la moral y convivencia social.

Hubo lugares y épocas en que la iniciativa privada era débil e impotente para proveer de la educación a los habitantes del país. Era natural en esos casos que el Estado proveyera a la educación de sus súbditos, puesto que era el único con recursos y fuerzas para proporcionarla. Pero esa extensión circunstancial de sus actividades no puede erigirse en principio de derecho; es sólo una suplencia tramitatoria, es una medida accidental de bienestar común.

La enseñanza es de incumbencia de la sociedad. Ella es la dispensadora natural de la educación y la principal perjudicada por su carencia o por sus desvíos. Si ella tiene fuerzas y aptitud para distribuir los conocimientos, debe dejársele en libertad de darlos; más aún, se le debe fomentar y ayudar, no sólo con estímulos verbales, sino también con contribuciones pecuniarias.

Creo que actualmente en mi país la sociedad tiene fuerzas para proporcionar una gran parte de la enseñanza primaria, media y superior que reclaman sus habitantes. Justo es que se le dé la libertad necesaria para establecerla y desarrollarla de acuerdo con sus propios impulsos y características. No nos cabe duda que ello redundará en beneficio de nuestra patria porque, en el afán de acreditarse y satisfacer las justas aspiraciones de la familia, desplegará energías insospechadas, suscitará el estímulo que vive en el clima de la libertad y llevará a altura desconocidas el progreso científico.

Lo que digo en el orden doctrinario es aplicable a todos los países de América aquí representados y lo que digo de mi país en el orden práctico sólo pretendo que sirva de ilustración y

deferencia para resolver en cada nación lo que más convenga de acuerdo con sus características sociales y condiciones políticas.

Y ya que estamos en un Congreso Inter-americano donde hemos invocado un Derecho Natural que a todos nos rige, un Derecho Político que todos respetamos porque tiene sus raíces en aquél, justo es también que hagamos una invocación a un Derecho Internacional que nos comprende a todos los que habitamos en el Continente descubierto por Colón. Me refiero al Acta de Chapultepec.

En la Conferencia Interamericana de la Guerra y de la Paz realizada en México en 1945 llamada por resolución de los delegados "Acta de Chapultepec" encuentro las declaraciones que hicieron los Estados de América en la sesión del 6 de marzo de 1945.

Entre ellas encuentro tres principios normativos que son aplicables a la tesis que defiendo y que paso a mencionar:

12º) El fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir sin libertad.

13º) Entre los derechos del hombre figura, en primer término, la igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los bienes espirituales y materiales que ofrece nuestra civilización, mediante el ejercicio lícito de su autoridad, su industria y su ingenio.

14º) La educación y el bienestar material son indispensables al desarrollo de la democracia.

Termino, señores congresales, haciendo votos para que en todos los países de América la libertad de enseñanza no sea una mera declaración constitucional de carácter abstracto sino que llegue a una realidad mediante leyes reglamentarias que devuelvan a la familia y a la sociedad ese derecho que nunca debió serles negado.

CONCLUSIONES

- 1º) La enseñanza primaria, secundaria, especial y universitaria será oficial y libre;
- 2º) La enseñanza libre podrá ser dada por particulares, asociaciones o personas legales;
- 3º) Los establecimientos libres de enseñanza podrán establecer sus planes, programas y horarios, tomarán examen ante sus mismos profesores, y expedirán certificados y diplomas de suficiencia;
- 4º) El Estado podrá exigir un mínimo de materias en las escuelas

primarias, una dotación básica en las Facultades de Medicina; y en todas el control que garantice la moral, las buenas costumbres, el respeto a las instituciones, el orden público, la salud y la higiene;

- 5º) En los países americanos deben dictarse leyes que garanticen y den efectividad al principio de la libertad de enseñanza establecido en las respectivas Constituciones.